

## **Crisis y desarrollo regional. Retos para el futuro de México**

José Antonio Romero Sánchez\*

### **Introducción**

México en los últimos años ha entrado a un proceso de transformación profunda de su sistema económico, por la vía de la reforma del aparato y funciones del Estado y de la apertura comercial. El objetivo ha sido reforzar el papel de las fuerzas de mercado respecto a la asignación de recursos productivos, derribando las barreras proteccionistas características del "modelo" precedente de sustitución de importaciones que desde la década de los setenta presentó signos de agotamiento.

El agotamiento y crisis de dicha vía, exige el cambio que hoy presentamos (inclusive por toda la región latinoamericana) y tiene, por lo tanto, un carácter irreversible, inevitable y necesario, para el sistema mundial que requiere de nuevas fuerzas concurrenciales. Así, se ubican los procesos de: globalización, reestructuración, reorganización o modernización de la economía capitalista mundial, según la posición teórica que se maneje.

El cambio no sólo se enmarca dentro de los parámetros económicos o sociales, también se centra dentro de las reformulaciones teóricas de los paradigmas, ya que la crisis también lo es de las ideas y las teorías que tienen una determinada formulación lógica de los fenómenos. En el momento actual, la ciencia social requiere de explicaciones teóricas y propuestas de estrategia de desarrollo acordes a los cambios objetivos que se presentan por todo el escenario mundial.

El trabajo que presentamos se circunscribe en este ámbito, y tiene como propósito definir el reto que tiene la economía me-

---

\* Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM.



xicana de insertarse adecuadamente al esquema actual que exige cambios estructurales en profundidad y donde el estudio del desarrollo regional forma parte de la preparación técnica que se requiere para lograr lo anterior, pasando por observar las contradicciones a las que es posible enfrentarse según el camino o vía de desarrollo seguido.

### Ubicación del problema

Entrada la década de los ochenta el país enfrenta la crisis más severa de su historia moderna a la vez de que el mundo se reorganiza bajo el manto de políticas neoliberales y la integración internacional; esto obliga a los gobiernos mexicanos a tomar una determinación definida y se decide por el rumbo de las reformas estructurales de libre mercado o apertura acelerada, utilizando métodos abiertamente autoritarios y salvajes.

Es decir, que México optó por transitar por el camino de la reestructuración capitalista en condiciones sociales completamente adversas debido, no obstante los programas de Solidaridad y Pronasol, a la precariedad en los niveles de vida de la población y obtenerse resultados desastrosos.

A nivel mundial la reestructuración capitalista, representa un proceso complejo en el que factores económicos, tecnológicos, políticos y cultural, se entrelazan y forman parte de la respuesta que el capital (como relación social fundamental del sistema capitalista) da para hacer frente a los cambios objetivos y abrir un nuevo ciclo de expansión de largo plazo. De tal manera que el profundo y sólido proceso de internacionalización económico-social, junto con la transformación de las relaciones Estado-economía, Estado-sociedad y la revolución tecnológica, son los principales escenarios en donde la reorganización mundial tienen mayor incidencia y manifestación y, consecuentemente, representa el escenario que enfrenta el país en lo interno y en lo externo.

Ahora bien, aunque el proceso es necesario e inevitable, no se puede sostener que sólo existe un camino posible para su instrumentación, caben en él diferentes y variadas vías donde su definición y adopción dependerá de la correlación de fuerzas

políticas y del papel organizado de los agentes sociales que enfrentan la contienda.

### México y los escenarios político y económico

La reforma de libre mercado que se instrumenta en el país ha pasado por dos momentos: uno político y otro económico. Respecto al primero se observó que la reforma política de afectación a los derechos de propiedad y la facultad de apropiación de la riqueza planteó un profundo conflicto entre la clase política y los detentadores de la riqueza económica (cuyo punto más alto se presentó entre 1984-1987 con la primera ruptura del PRI y la caída de la Bolsa), hecho que en términos positivos trajo la imperiosa negociación política que permite el fortalecimiento del sistema de mercado y la desburocratización de la economía.

Paralelamente se da el segundo momento, pues la negociación implicó la firma del llamado PSE, firmado en diciembre de 1987, el cual abrió la nueva relación de fuerza entre el sector público y el privado. Tal situación marca tres consecuencias trascendentales:

1. Profundiza el proceso de privatización y se le asigna el papel de mediador para consolidar al sector monopolístico.
2. Lo anterior da como resultado que el nuevo marco regulatorio queda sometido a mayores presiones.
3. Se requiere de una reforma más profunda para garantizar el derecho a la propiedad, principalmente en el campo.

Para finales de la década se notan avances importantes a nivel sectorial: en el sector industrial, por ejemplo, a partir de un proceso de reestructuración productiva comandada por los grupos financieros se da una respuesta inmediata sobre los niveles de eficiencia y reorganización productiva al elevar sus índices de productividad bajo una nueva lógica (ruptura del sistema proteccionista o de economía cerrada y modificación de las bases benefactoras del Estado intervencionista).

Dicha lógica impulsa un nuevo dinamismo económico que no está más determinado ni limitado por la magnitud de la intervención y el gasto públicos; pero que, sin embargo, su



recuperación y expansión productiva sigue siendo marcadamente desigual.

El sector agropecuario, representa el caso más ilustrativo de tal desigualdad, al observar uno de los más profundos y perturbadores rezagos de su historia, ante una industria que comanda el proceso de acumulación de capital desde los años sesenta. Esta contradicción representa el agotamiento de la relación entre la industria y la agricultura, a pesar de que ésta última desarrolló en su interior ramas agropecuarias altamente industrializadas e internacionalizadas.

Por lo tanto, el rezago del sector ha venido representando un freno y fuente de tensiones para el desarrollo del sector punta, al observar que ni los procesos agroindustriales (que si bien trajeron avances productivistas al aplicar nuevas tecnologías o "paquetes" tecnológicos) pudieron romper los límites de la masificación de sus productos con el propósito de abatir el valor de la fuerza de trabajo y elevar el nivel de vida de la población por medio del consumo de sus productos agropecuarios superiores. O dicho en otras palabras, no pudieron lograr que parte de las ganancias obtenidas por estas ramas rompieran la rigidez de la producción de básicos, limitando las posibilidades de desvalorizar la fuerza de trabajo, como requisito para relevar la rentabilidad capitalista, y neutralizar las presiones inflacionarias.

### **Economía mexicana y la crisis de 1994**

México en los últimos 12 años de gobierno observó avances importantes en el conjunto de su economía; el proyecto neoliberal aplicado (y caracterizado por las medidas de política de ajuste y estabilización) era exitoso, según los criterios de política económica impulsados por el gobierno, y de resultados halagüeños.

No obstante, la dinámica desarrollada durante estos dos sexenios y que permitió el crecimiento del PIB, la corrección de los desequilibrios en la Balanza de Pagos y la Cuenta Corriente, etc., se condujo por el camino de una mayor concentración del ingreso al observarse: grave disminución de los niveles de

la vida de la población, incremento en los niveles de pobreza extrema, incrementos alarmantes del desempleo, etcétera.

Por otro lado, el proyecto gubernamental de cambios en las funciones y el papel del Estado, exigido por las circunstancias mundiales, tiende a la transformación gradual de un Estado benefactor a uno más racional en sus funciones económicas, de un Estado inversor a uno regulador, al aplicar medidas de política económica para impulsar la apertura comercial e inserción de nuestra economía a la órbita mundial.

El resultado, posiblemente no esperado por todos, fue nuevamente padecer de una crisis económica de gran envergadura (crisis estructural), por más que se quiera o se desee demostrar que sólo es de liquidez y pasajera. Es decir, la crisis de 1994 se vuelve más grave y profunda que la de 1982 porque en ella convergen elementos endógenos y exógenos no desarrollados o sólidamente encadenados en sus efectos.

En lo interno, presenciamos que el agotamiento del sistema político nacional y del partido de Estado está locando fondo, y pasa a convertirse en una crisis política de enormes implicaciones para la vida democrática del país. Además, se enfrenta una crisis social significativa y cualitativamente distinta a las escañecadas en otros periodos; la de hoy muestra las luchas ya no sólo de los trabajadores del campo y la ciudad por mejores precios agrícolas o reivindicaciones laborales; sino también entramos movilizaciones por espacios territoriales de vivienda, por servicios públicos y asistenciales, por superar el deterioro ambiental y ecológico, por espacios y procesos democráticos reales, etc. etc. que se desarrollan no sólo con mayor frecuencia sino coordinadamente y con mayor conciencia política.

Externamente, presenciamos el encadenamiento de los procesos económicos característicos de la fase de desarrollo del nuevo entorno mundial: consolidación e integración de grupos financieros internacionales, inserción de las economías de desarrollo medio y atrasadas a la economía mundial por la vía del comercio (Tratados, Convenios, procesos de globalización) que provocan reacciones en cadena ante cualquier eventualidad de desequilibrio económico o político-social. Las crisis de Brasil y Argentina son solamente algunas.

El gobierno actual tiene ante sí un difícil reto por vencer, pero hasta el momento no ha demostrado querer o poder



resolver; el continuismo en las medidas de política económica y en las políticas que el gobierno de Ernesto Zedillo ha promovido, hacen aún más difíciles los caminos elegidos. Insistimos, no podemos sostener que sólo existe un camino posible para la resolución del problema económico y social mexicano, caben en él diferentes y variadas vías concretas donde su definición dependerá de la correlación de fuerzas políticas y el papel organizado de los agentes sociales que enfrentan la contienda.

### ¿Por qué el desarrollo regional?

En México, se ha dicho, la reestructuración fue dinamizada bajo condiciones sociales adversas, debido a la precariedad de los niveles de vida de la población, al efectuar el desmantelamiento de las viejas estructuras y generar consecuencias sociales desastrosas. Se reconoce, por lo tanto, que sus formas tradicionales de concentración y centralismo económico y político trajeron una estructura sesgada al generar gigantismo industrial ineficiente y burocratizado, o bien un pequeño oasis de agricultura especializada obstaculizada también por trabas burocráticas; y que en lo político está representado por el Estado omnipotente e intervencionista.

En consecuencia observamos que los límites de sus tradicionales formas de centralidad y de sus tradicionales formas de intervención se encuentran dados por:

1. La crisis del taylorismo y del fordismo, con la aparición de la revolución electrónica, la robótica, la biogenética.
2. Por el agotamiento de importantes áreas naturales de reproducción que, en un plano general, comienzan a expresarse en la posibilidad de una catástrofe ecológica mundial.
3. Por el alto costo económico y político provocado por el uso de "energías alternativas", específicamente la energía nuclear.
4. Por los enormes "rendimientos decrecientes" provocados por el gigantismo agrícola, (e industrial), sumado a la condición tendencialmente depreciable del medio físico (con la aplicación de sofisticada tecnología y del recurso hidráulico en extensiones amplias—con sus secuelas de erosión, el enorme desperdicio del agua o de los límites naturales para la

- captación multiplicada del líquido—, el uso de agroquímicos y fertilizantes a la larga nocivos).
5. Por los límites o declinación de las tradicionales economías de escala generadas por la concentración industrial y de servicios en las grandes urbes, aunado a sus graves efectos en el medio ambiente y condiciones de reproducción de la vida urbana.
6. Por el desgaste o la infuncionalidad—y costo—crecientes de las formas tradicionales de organización de los trabajadores frente a las nuevas condiciones de desarrollo tecnológico, que obligan el establecimiento de mejores y mayores mecanismos de interrelación e intervención del obrero en el control y la gestión directa del proceso de producción de fábrica y de la competencia internacional, manifestos en la crisis del sindicalismo corporativo.
7. Por la emergencia de nuevos movimientos sociales respecto a la "apropiación del proceso productivo" y las condiciones de reproducción de la vida social, por la defensa del medio ambiente y la reconstrucción ecológica, por la democracia, etcétera.

A estas alturas de fin y comienzo de sexenio, sabemos en mucho las implicaciones que trajeron las medidas de política instrumentadas en el periodo recién pasado: en lo económico, a través del liberalismo y la apertura comercial a toda costa, se lograron importantes signos de recuperación de la economía, aunque para el año de 1993 la tasa de crecimiento fue de sólo el 0.6 por ciento.

En lo político nos encontramos con una profundización de la crisis del partido en el gobierno aparentemente fácil de superar; se siguen los métodos de "unidad a toda costa"; y en lo social un sombrío panorama representado no sólo por las motivaciones guerrilleras de Chiapas y de los movimientos por la democracia por varios estados del país, sino por las graves condiciones de pobreza extrema en amplios sectores de la población en los últimos seis años.

El panorama descrito muestra lo impostergable de llevar adelante medidas económico-sociales viables, sólidas y con un amplio consenso interno que posibilite el desmantelamiento de las viejas estructuras de poder político y económico del Estado



mexicano y de las prácticas atrasadas de oposición de la sociedad civil. De otra manera, *hay necesidad de repensar en un proyecto de nación real* que permita determinar las tendencias y fenómenos endógenos y exógenos, ponerlos en la mesa de discusión regional y hacerlos llegar oportunamente a los diversos grupos sociales y entidades administrativas. Ello posibilitaría la actuación responsable y la definición de propuestas plausibles.

El paso a un nuevo ciclo expansivo del capital, pensamos, no es necesariamente centralizador o autoritario, y genera, por sus propias contradicciones, condiciones no despreciables para que florezcan (desde la presión y lucha de los sujetos sociales activos —populares en lo fundamental— en los procesos de cambio, pero dentro del ciclo crítico y “de salida” propias del capital) ciertas formas de gestión de fábrica con una importante participación obrera (manifestas ya en algunas áreas industriales de los países centrales) y, en los medios rurales, ciertas formas de “apropiación de los procesos productivos” por otra parte de productores directos, dado el desmembramiento de algunas de las viejas estructuras centralizadas del poder político y económico (concentradas antes en el “gran Estado”). En el caso específico de México el desmembramiento del viejo Estado centralista y autoritario se inscribe, al mismo tiempo, en la crisis del corporativismo. En la década setenta, dicho desplazamiento se da, por un lado, a partir de las luchas de numerosos núcleos ejidales y comunales que deciden salir del encuadramiento corporativo y construir sus propios mecanismos e instrumentos de relación y de negociación con el gobierno; pero también se da por la política estatista del echeverrismo, que invade los espacios del sector social rural por medio de las paraestatales y dependencias, mismas que empiezan a ocupar una buena parte de los conductos de intermediación antes monopolizados por la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En el proceso actual de “desincorporación” y de “adelgazamiento” del Estado, el campo ejidal y comunitario se vuelve entonces tierra de disputa que puede ser ganada por nuevos sujetos sociales organizados; ello lleva, a la vez, a un fuerte proceso de rearticulación general de las relaciones sociales y de redistribución o redefinición de poderes en los niveles regiona-

les: formas anteriormente muertas o vacías de gobierno local, como el municipio, adquieren una nueva función en el edificio de los poderes estatales, y se convierten en áreas decisivas de *gestión económica e intervención política*.

De tal forma que *la región* es hoy área privilegiada de la reorganización del capital, pues la resolución de su crisis actual lleva a que se desarrollen firmes tendencias a la desconcentración y a la descentralización de una parte importante de su cuerpo y de sus órganos reproductivos. Y hablamos de región pues el cambio actual de las relaciones sociales básicas presupone, de entrada, una modificación espacial fundamental de las formas de reproducción de la vida social y productiva dada, por un lado, por un nuevo reordenamiento de la relación sujeto-objeto en los procesos laborales o en los procesos de gestión de la vida social y productiva (presupuesto en el cambio tecnológico o en el “adelgazamiento” o “desincorporación” estatal, o en la búsqueda de alternativas productivas que permitan la rehabilitación o reconstrucción de los ecosistemas, etc.); pero el reordenamiento que se deriva es, también, de las formas de gobierno y de articulación o anudamiento de las relaciones sociales y políticas territorializadas, vale decir, —en primer lugar, aunque no sólo— del ayuntamiento y, ligado a éste, de las redes del poder político tejidas sobre los gobiernos estatales.

Lo anterior nos lleva a pensar y a concluir que *la región*, será un espacio que demandará crecientemente capacidades específicas —de formación y especialización— académica en el área de Desarrollo Regional.